



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05088-31-05-001-2018-00635
Demandante:	María Trinidad Montoya Montoya
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Consulta Sentencia
Procedencia:	Juzgado Laboral del Circuito de Bello
Magistrada:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	NULIDAD SENTENCIA ANTICIPADA INCREMENTOS PENSIONALES

AUTO DE NULIDAD

Medellín, siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados, CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Ponente, procede a decidir sobre la procedencia de la sentencia anticipada proferida el 13 de julio de 2020, por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia, instaurado por la señora MARÍA TRINIDAD MONTOYA MONTOYA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Radicado 05088-31-05-001-2018-00635-01, con arreglo a los siguientes planteamientos:

1. ANTECEDENTES

Mediante auto del 24 de septiembre de 2018, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, avocó conocimiento del proceso ordinario laboral de UNICA INSTANCIA, instaurado por la señora MARÍA TRINIDAD MONTOYA MONTOYA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en el cual se pretende que, previa declaración del derecho, se condene a dicha entidad, al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por hija a cargo, joven YULIANA CASTAÑEDA MONTOYA, en forma retroactiva e indexada.

Admitida la demanda y notificada a la accionada, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante oficio radicado el 06 de agosto de 2019, formuló solicitud de sentencia anticipada, con fundamento en la sentencia SU140 de 2019, considerando que *“no tiene ningún sentido seguir discutiendo un asunto sobre el cual la Corte Constitucional ya se pronunció, que lo único que genera es desgaste y congestión judicial”*.

Por auto del 3 de julio de 2020, se pone en conocimiento de las partes la solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se fija como fecha para proferir sentencia anticipada el día 13 de julio de 2020, la cual se profiere en tal data en forma escrita.

2. CONSIDERACIONES

2.1. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Deberá la Sala determinar:

¿Procede la sentencia anticipada en materia laboral?

¿La sentencia anticipada en materia laboral puede excepcionar el principio de oralidad consagrado en el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social?

¿El proceso ordinario laboral, con pretensión de incrementos pensionales, puede ser considerado un asunto de puro derecho?

2.2. TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual, si bien, en principio, es procedente la sentencia anticipada en el procedimiento laboral, debe ser proferida en audiencia oral de conformidad con el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la seguridad Social y con apego estricto a los supuestos normativos del artículo 278 del Código General del Proceso, lo que no ocurrió en este caso al no tratarse de un asunto de puro derecho y por lo tanto debe declararse la nulidad de lo actuado en la instancia, a partir del auto del 3 de julio de 2020, que pone en conocimiento la solicitud de sentencia anticipada formulada por la Agencia Nacional para la Defensa Judicial del Estado y fija fecha para la referida sentencia.

2.3. PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece las causales de procedencia de la sentencia anticipada:

“(...) Artículo 278. Clases de Providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

(...)

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa (...).”

El ordenamiento procedimental del trabajo y la seguridad social, no faculta al Juez o Magistrado laboral, para proferir sentencia anticipada.

Ahora, con la reforma procedimental contenida en la Ley 1149 de 2007, el legislador estableció, en el artículo 47, lo siguiente *“si en la audiencia o en cualquier etapa del proceso resultan probadas con documento pretensiones de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables de trabajador, el juez ordenará el pago y el proceso continuará en relación con las demás pretensiones”*, norma que fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional, en la sentencia C470 de 2011, al considerar que:

“En efecto, sin ignorar que podrían generarse algunos beneficios de la aplicación de esta norma, la Corte observa que son mayores las dificultades que de ella pueden resultar, en primer término, para los empleadores, parte que en todos los casos sería la directamente afectada por la decisión que en desarrollo de la misma se tomaría, pero también para el sistema judicial en su conjunto.

Esta apreciación deriva del hecho de que, pese a las precauciones previstas en la norma, que en principio impedirían su aplicación salvo que exista una prueba cierta y confiable del derecho reclamado, es posible en todo caso que se adopten decisiones, concretamente órdenes de pago, que carezcan del suficiente debate probatorio previo, y especialmente que no observen debidamente el principio de contradicción de la prueba, las que sin duda serían lesivas para la parte a cuyo cargo se ordena el pago”.

No obstante lo anterior, no es posible concluir de plano, la improcedencia de la sentencia anticipada en materia laboral, porque con ello se desconoce el carácter supletivo de las disposiciones del Código General del Proceso, en el trámite adjetivo laboral, en virtud del principio de integración normativa, conforme lo dispuso el legislador, en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en el artículo 1º del mismo Código General del Proceso, así como la finalidad de la sentencia anticipada, que no es otra que materializar los principios de celeridad y economía procesal, en armonía con el mandato del artículo 4 de la ley estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 48 del Código Procesal Laboral.

Ahora, la sentencia anticipada, si bien conlleva la supresión de etapas procesales, que resultan innecesarias, de manera alguna constituye una excepción al principio de oralidad, que en materia laboral es inexcusable en los

términos del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que dispone “*las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las que expresamente señalen la ley*” y en todo caso su aplicación está restringida a las tres causales descritas en el artículo 278 del Código General del Proceso, ya citado.

Observando que, en este asunto, no opera ninguna de las causales que señala la norma, pues las partes no solicitaron de común acuerdo la sentencia anticipada, existen pruebas que practicar, en relación con los supuestos fácticos de dependencia económica de la hija de la pensionada accionante y no se presentan tampoco los fenómenos jurídicos de cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva, ni carencia de legitimación en la causa.

Respecto a la segunda causal relativa a la inexistencia de pruebas por practicar o que las mismas resulten inútiles, aducida por el fallador primario, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC3529 del 20 de marzo de 2019, señaló:

“Bajo esa perspectiva, el legislador le impuso al juez la obligación de poner fin a las controversias con prontitud en los eventos en que es innecesario agotar otras etapas o diligencias para definir una situación jurídica, lo cual, guarda armonía con los principios de eficiencia y celeridad de la administración de justicia.

Pero, la obligación de culminar la causa con premura, en particular cuando «no hubiere pruebas por practicar», debe ser aplicada con prudencia, pues, el juez no puede omitir la práctica de un elemento de convicción fundamental para la decisión definitiva, ya que vulneraría el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia de las partes.

Por tal razón, al hacer uso del deber de dictar sentencia anticipada, la autoridad judicial está obligada a evaluar las particularidades de la controversia, la pertinencia y la conducencia de los medios de convicción solicitados en la causa y si resulta pertinente la práctica de otros con trascendencia en el asunto, para establecer si es posible en el escenario del proceso, tomar una decisión ajustada al ordenamiento jurídico” (subraya intencional)

No se trata entonces de un asunto de puro derecho y por lo tanto el Juez solo podía pretermittir la etapa probatoria, en un juicio previo de inconducencia, pertinencia o inutilidad de la prueba, lo cual debe efectuarse en el estadio

procesal correspondiente como lo es la etapa de decreto de pruebas, dentro de la audiencia única prevista en el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Debe precisarse, que el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, que invoca la Agencia Nacional de Defensa Judicial, como fundamento de la solicitud de la sentencia anticipada, no tiene el alcance pretendido, pues la misma faculta a los jueces para “fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998”, como se observa, la norma en comento, hace referencia a la alteración de los turnos para fallar procesos que se encuentren a Despacho, esto es, aquellos respecto a los cuales, se ha cumplido la etapa probatoria y se encuentran pendientes exclusivamente de la sentencia.

De manera que la expedición de la sentencia SU140 de 2019, que determinó la derogatoria del artículo 21 y 22 del decreto 758 de 1990, a partir del 01 de abril de 1994, no constituye una causal de sentencia anticipada, pues no es la valoración previa, de la no prosperidad de una pretensión, la que faculta al fallador, para pretermittir la etapa probatoria y proferir sentencia anticipada. Debe anotarse, además, que la derogatoria de las referidas disposiciones, no es un tema pacífico en la jurisprudencia nacional.

Causal de Nulidad

Al desconocerse el principio de oralidad que rige las actuaciones laborales se incurre en la causal de nulidad específica prevista en el artículo 42 del Código Procesal Laboral, antes citado.

Igualmente, al no ser procedente la sentencia anticipada, el funcionario de primer grado, incurre en la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso “5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria”.

Ahora, para la Sala se trata de una causal de nulidad insaneable, en primer lugar por la previsión del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en segundo lugar, por su carácter supralegal, al tratarse del quebrantamiento de las reglas propias del juicio, garantía propia del debido proceso constitucional consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, razones por las cuales es procedente declarar la nulidad según el mandato del artículo 137 del Código General del Proceso.

3. DECISION

Por las consideraciones anteriores, se declarará la NULIDAD de la actuación a partir del auto del 3 de julio de 2020, mediante el cual se da traslado de la solicitud de sentencia anticipada formulada por la Agencia Nacional para la Defensa Judicial del Estado y se dispone señalar fecha, para que tenga lugar la audiencia única de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, trámite y juzgamiento prevista en el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

RESUELVE

1.- Se **DECLARA LA NULIDAD** de la actuación adelantada en el presente proceso por el señor Juez Laboral del Circuito de Bello, a partir del auto del 3 de julio de 2020, que pone en conocimiento la solicitud de sentencia anticipada formulada por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y fija fecha para la referida sentencia y en su lugar, se dispone que el señor Juez de conocimiento, proceda a señalar fecha para que tenga lugar la audiencia única de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, trámite y juzgamiento, prevista en el artículo 72 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

2.- Sin **COSTAS** en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No.**57** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 8 de abril de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario